

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Cesáreo Paz y Hermano, Fuente del Rey número 6 á 20 rs. trimestre para esta capital, y 30 para fuera franco de porte por Arismestres adelantados.—Números sueltos á 12 cuartos el pliego.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

Barcelona 25 de setiembre á las cinco y media de la tarde.—El Presidente del Consejo de Ministros al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación.

La salud de S. M. la Reina sigue sin novedad, así como la de la augusta Real familia. Las muestras de adhesión por parte de los catalanes hacia la Real Persona crecen de día en día.

Ayerche S. M. se dignó asistir al teatro del Liceo, donde fue objeto de las extraordinarias ovaciones, así como á la vida y á la vuelta; ésta se verificó á las dos de la madrugada. Una multitud inmensa llenaba la anchurosa Rambla y demás calles del tránsito, ansiosa de manifestar á S. M. su lealtad y su entusiasmo.

(Gaceta de Madrid núm. 270.)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

Barcelona 26 de setiembre á las cinco y tres minutos de la tarde.—El Presidente del Consejo de Ministros al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación.

La salud de S. M. la Reina y su augusta Real familia continúa sin novedad. En cada vez mayor el entusiasmo que la presencia de las Reales Personas despierta en esta capital, donde todas las clases se esfuerzan á portar por manifestar á S. M. la Reina su profunda adhesión. Esta noche asistirán S. M. á la función preparada por el Ayuntamiento en los Campos Eliseos.

(Gaceta de Madrid núm. 271.)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

Barcelona 27 de setiembre á las siete y quince minutos de la tarde.—El Presidente del Consejo de Ministros al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación.

S. M. la Reina y su augusta Real familia continúa sin novedad en su importante salud.

Las manifestaciones de adhesión hacia S. M. son cada vez más vivas y espontáneas por parte del pueblo catalán. Una multitud inmensa acompañó anoche á S. M. al Palacio de la Real Academia de Ciencias, donde fue mayor el entusiasmo.

cabe el entusiasmo. La iluminación y los fuegos artificiales con que se obsequió á S. M. fueron de un efecto sorprendente.

Hoy se ha dignado visitar S. M. el establecimiento fabril La España industrial, y después ha distribuido por su regia mano los premios á los artesanos que por su virtud y laboriosidad se han hecho dignos de esta recompensa.

Esta noche S. M. concurrirán al teatro Principal.

(Gaceta de Madrid núm. 272.)

ARTICULO DE OFICIO.

PRIMERA SECCION.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

Número 570.

En la Gaceta de Madrid número 270 del miércoles 26 de setiembre último se lee lo siguiente:

MINISTERIO DE MARINA.

REAL DECRETO.

En atención á las circunstancias que concurren en el Brigadier de la Armada D. José Montojo y Albizu,

Yengo en promoverle al empleo de Jefe de Escuadra supernumerario.

Dado en la mar, á bordo de la fragata *Princesa de Asturias*, á 21 de setiembre de 1860.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Marina, Juan de Zavala.

MINISTERIO DE FOMENTO.

Comercio.

Vista la ley de 11 de julio de 1856, por la cual se facultó á las sociedades concesionarias de Obras públicas para emitir obligaciones al portador con interés fijo y amortización determinada dentro del período de la concesión, con hipoteca de las obras y rendimiento del ferro-carril, canal ú obra pública á cuya explotación se destinen, y determinó que el importe de todas las obligaciones emitidas no pudiese nunca exceder de la mitad del capital realizado de las acciones de la sociedad:

Vista la ley de 11 de julio del corriente año, que amplía la emisión de obliga-

ciones hasta el importe de la suma total del capital realizado, y considera como tal para este efecto la subvención concedida de fondos públicos, provinciales ó municipales, á medida que las compañías la reciban.

Considerando:

1.º Que con arreglo al texto de las disposiciones de las leyes expresadas, la cifra de las obligaciones que las compañías concesionarias de Obras públicas están autorizadas para emitir es la equivalente al valor nominal de las mismas:

2.º Que si el Gobierno ha concedido á alguna de dichas compañías, y con anterioridad á la última de las expresadas leyes, autorización para que la cifra de las emisiones se computase por el tipo del valor real de las obligaciones ó sea por la cantidad que produjese su negociación en el mercado, estas autorizaciones, concedidas como gracias especiales en interés del desarrollo de las empresas, y teniendo en cuenta la poca latitud que la legislación anterior concedía al uso del crédito, no pueden continuar después que la ley de 11 de julio último ha extendido dicho uso en mas vasta escala;

S. M. la Reina, sin perjuicio de las demás disposiciones reglamentarias á que pueda dar lugar la mencionada ley, se ha servido decretar lo siguiente:

1.º La suma de las obligaciones que las empresas concesionarias de obras públicas están facultadas para emitir, con arreglo al art. 1.º de la ley de 11 de julio del corriente año, se computará en razón de su valor nominal, ó sea de la cantidad que dichas obligaciones representen.

2.º Las compañías que hubiesen alcanzado la gracia de que la emisión de sus obligaciones se computara para los efectos de la ley de 11 de julio de 1856 por el tipo de su negociación, ó sea por la cantidad que produjeren en el mercado, se atemperarán á lo dispuesto en la regla anterior. En su consecuencia, las compañías que se hallasen en aquel caso computarán las emisiones hechas al tipo del valor representativo de sus obligaciones para calcular la cantidad que aun les es dado emitir.

3.º Los Gobernadores de las provincias y delegados del Gobierno en dichas compañías, respectivamente, vigilarán cuidadosamente el cumplimiento de esta disposición.

Lo que de orden de S. M. manifiesto á V. S. para su conocimiento y efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. San Ildefonso 31 de agosto de 1860.—Carrera.—Señor....

SEGUNDA SECCION.

CIRCULAR NUMERO 571.

Dirección de Gobierno.—Negociado 4.º

Mandando proceder á la busca y captura de Maria Antonia Otero y Perez.

Los señores Alcaldes de los pueblos de esta provincia, empleados de vigilancia, Guardia civil y demás dependientes de mi autoridad, procederán á la busca y captura de Maria Antonia Otero Perez, cuyas señas se expresan á continuación, la cual desertó de la casa-galera de la Coruña; y caso de ser habida, sea puesta á disposición de este Gobierno. Orense 29 de setiembre de 1860.—Francisco Javier Camuño.

Señas de la Maria Antonia Otero.

Natural de San Pedro de Muros provincia de la Coruña, vecinada en Santa Maria de Arelan, hija de José y de Bernarda, edad 17 años, estado soltera, pelo negro, cejas idem, ojos castaños, nariz roma, cara redonda, boca regular, color rosado, estatura 4 pies.

CIRCULAR NUM. 572.

Sección de Gobierno.—Negociado 4.º

Mandando proceder á la busca y captura del autor ó autores del robo cometido en la Iglesia de San Martín de Riobó.

Los Sres. Alcaldes de los pueblos de esta provincia, empleados de vigilancia, Guardia civil y demás dependientes de mi Autoridad, procederán á la busca y captura del autor ó autores del robo cometido en la iglesia parroquial de San Martín de Riobó en la madrugada del día 26 del próximo pasado mes; los cuales, caso de ser habidos, serán puestos á disposición de este Gobierno con los efectos que en su poder se encuentren; advirtiéndolo que los robados son los que aparecen á continuación.

Orense 1.º de octubre de 1860.—Francisco Javier Camuño.

Alhajas que se citan.

Un cáliz de plata y copa de oro,

otro usado de plata, dos patenas y dos cucharillas, un incensario de plata, una naveta id. con su cuchara, un viril, una cruz grande parroquial de mucho valor y forma antigua, la cruz de plata de un pendon con su cordón de seda, el sagrario de plata para conducir el Viatico a los enfermos.

CIRCULAR NUM. 573.

Beneficencia y Sanidad.—Negociado 3.º

Mandando averiguar la naturaleza y procedencia de una mujer demente.

Los Sres. Alcaldes de esta provincia se servirán manifestar á este Gobierno á la mayor brevedad, si una demente que se halla detenida en la cárcel de esta capital desde el mes de julio último, y cuyas señas se expresan á continuación, es natural, vecina ó procedente de sus respectivos pueblos.

Orense 4.º de octubre de 1860.
—Francisco Javier Camuño.

Señas de la demente.

Edad como de 30 años, estatura regular, cara ancha, color triguño.

Continúa la lista de la suscripción de acciones al ferro-carril de Galicia, titulado del PRINCIPE DON ALFONSO.

SUSCRITORES. Núm. Su VALOR. de acciones. Rs. vn.

Suma anterior... 1,672 3,344,000

Señores Don:

Miguel Calapris y Lo-
sada, Abad de San
Payo de Abeldar... 6 12,000
José Fidalgo Saavedra,
Abad de Santa María
de Parada de Ou-
teiro... 5 6,000
Benito Vazquez... 5 6,000

TOTAL HASTA LA FECHA: 1,684 3,368,000

Orense 28 de setiembre de 1860.—
Francisco Javier Camuño.

(Se continuará.)

JUNTA PROVINCIAL

DE INSTRUCCION PÚBLICA DE ORENSE.

Para que las Juntas locales remitan los presupuestos para la construcción y reparación de edificios de escuela, por conducto y con informe de los Ayuntamientos, quienes lo hagan á su vez de los expedientes de subvención si la necesitan.

En la disposición 13 de la Real orden de 18 de octubre del año último, dictada para la organización y arreglo de las escuelas de Galicia, y publicada en el Boletín número 135 del mismo, se ordena que las Juntas locales formen el presupuesto para mejorar los locales de escuelas con arreglo al modelo oficial, ó acompañando los planos si las circunstancias de la localidad exigen en aquel alguna modificación, contribuyendo á este gasto los fondos generales del Estado si los del Ayuntamiento no pueden soportarlo, con las formalidades establecidas en la Real orden de 24 de julio de 1856. Y considerando esta Provincial de

aboluta necesidad la construcción de edificios para escuelas, particularmente en la cabeza de los distritos municipales, de que carecen la mayor parte, y reparación de los existentes, ha acordado que las Juntas locales, cumpliendo con la citada disposición, formen inmediatamente el indicado presupuesto, remitiéndolo á esta superioridad por conducto y con informe de los Ayuntamientos, quienes á su vez y en su caso instruirán los oportunos expedientes para la subvención, si la necesitan, con arreglo á la expuesta Real orden de 24 de julio.

Los señores Alcaldes se servirán dar cuenta de la presente circular en la primera sesión que celebren las Juntas y Ayuntamientos del respectivo distrito municipal.

Orense 27 de setiembre de 1860.—
Francisco Javier Camuño, Presidente.—
P. A. D. L. J., Eliseo Fidalgo y Saavedra, Secretario.

Para que las Juntas locales y Ayuntamientos no hagan alteración ni innovación alguna en el ramo, sin proponer antes lo conveniente.

Ha llamado la atención de esta Junta provincial el que algunas locales y Ayuntamientos, acaso por efecto de un demasiado celo, resuelven sobre nombramientos de maestros, traslaciones de éstos y locales de escuela, poniendo en ejecución sus resoluciones, sin tener presente que no solo se exceden de sus atribuciones, sino que introducen la confusión y trastornan el orden establecido para el buen régimen y progreso de la enseñanza.

A evitar estos inconvenientes, ha acordado hacer saber á todas las Juntas locales y Ayuntamientos, que en lo sucesivo bajo ningún motivo ni pretexto hagan alteración en lo existente ni innovación alguna, sin perjuicio de que cuando conceptúen útil adoptar alguna medida en beneficio de la enseñanza, propongan lo conveniente, manifestando las razones en que se funden para adoptar lo que proceda.

Los señores Alcaldes se servirán dar cuenta de la presente disposición en la primera sesión que celebren las respectivas Juntas y Ayuntamientos.

Orense 27 de setiembre de 1860.—
Francisco Javier Camuño, Presidente.—
P. A. D. L. J., Eliseo Fidalgo y Saavedra, Secretario.

TERCERA SECCION.

En la Gaceta de Madrid número 265 del 21 de setiembre último se lee lo siguiente:

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.

En la villa y corte de Madrid, á 18 de setiembre de 1860, en el pleito seguido por Francisco Vilarelle y el curador «ad litem» de los tres hermanos menores de éste sobre prestación de alimentos civiles, pendiente ante Nos por recurso de casación interpuesto por el primero contra la sentencia de la Real Audiencia de la Coruña:

Resultando que D. Andres Vilarelle y Maria Perez otorgaron una escritura en 1.º de febrero de 1828, por la cual, condesando ser solteros y haber tenido cuatro hijos, de los cuales sobrevivía Francisco, estipularon y convinieron en dejarse mutuamente en entera libertad de poder contraer matrimonio como mejor les

conviniere, bajo la condicion de entregar el primero á la segunda la cantidad de 300 rs. por razon de la lactancia y cria de los niños, y de apartarse la Maria Perez por si y su hijo Francisco de pedir ni reclamar cosa alguna desde aquel dia en adelante:

Resultando que en 1.º de febrero de 1857 presentó demanda Francisco Vilarelle en el Juzgado de primera instancia de Ordenes con la solicitud de que se condenase á sus hermanos, hijos legítimos y herederos de D. Andres Vilarelle, á que con arreglo y en proporción á 27.000 rs. que tocaron á éste de la herencia que sus padres habian dejado á su fallecimiento, ó segun tasa judicial, le pagasen los alimentos legales, que justamente se le debían para subvenir á sus urgencias y perentorias atenciones, mediante á ser pobre y hallarse imposibilitado de trabajar:

Resultando que Josefa Vilarelle y el curador de los hermanos de la misma se opusieron á esta demanda, primero, por no ser cierto que su padre hubiese dejado á su muerte aquella cantidad; y segundo, porque el demandante era más rico que ellos, y no podía por lo tanto obligárseles legalmente á mantenerle.

Resultando que, recibido el pleito á prueba y hecha la que los interesados conceptuaron conveniente á su propósito, dictó sentencia el Juez en 22 de julio de 1857, la cual confirmó la Sala segunda de la Audiencia de la Coruña en 10 de diciembre del mismo año, absolviendo de la demanda á la Josefa Vilarelle y sus hermanos:

Resultando que Francisco Vilarelle interpuso el presente recurso de casación, porque, en su sentir, se habia infringido la ley 8.ª, título 13 de la Partida 6.ª, cuyo epigrafe dice «quanto puede heredar el hijo que no es legítimo en los bienes de su padre si muere sin testamento, ó el padre en los bienes de tal hijo»:

Visto, siendo Ponente el Ministro Don Pablo Jimenez de Palacio:

Considerando que la obligación que las leyes imponen á los herederos de alimentar á los hijos naturales de quienes el padre se olvidó, ó no hizo mérito en su testamento, es condicional y dependiente de la importancia de la herencia y del estado de fortuna de los primeros:

Considerando que este último extremo ha sido materia de prueba testifical y apreciado por la Sala sentenciadora en uso de la facultad que le confiere el artículo 317 de la ley de Enjuiciamiento civil, por cuya razon no se ha infringido en la sentencia la ley 8.ª, título 13 de la Partida 6.ª

Hallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Francisco Vilarelle contra la sentencia pronunciada por la Sala segunda de la Audiencia de la Coruña en 10 de diciembre de 1857, y le condenamos á la pérdida de los 2,000 reales por que prestó caucion para quando llegase á mejor fortuna y al pago de las costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta e insertará en la Colección legislativa, pasándose al efecto las oportunas copias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Ramon Lopez Vazquez.—Sebastian Gonzalez Nandin.—Miguel Osca.—Antero de Echarrri.—Pedro Gomez de Hermosa.—Pablo Jimenez de Palacio.—Laureano Rojo de Norzagaray.

Publicacion.—Leida y publicada fué

la sentencia que precede por el Ilmo. Señor D. Ramon Lopez Vazquez, Presidente de la Sala primera del Tribunal Supremo de Justicia, estándose celebrando audiencia pública en la misma, de que certifico como Secretario de S. M. y Escribano de Cámara en dicho Supremo Tribunal.

Madrid 18 de setiembre de 1860.—
José Calatraveño.

En la villa y corte de Madrid, á 18 de setiembre de 1860, en los autos pendientes ante Nos en virtud de apelacion interpuesta por Pedro Mansilla y otros siete vecinos del lugar de Revilla del Campo de la providencia dictada por la Sala segunda de la Audiencia de Burgos, denegatoria de la admision del recurso de casacion:

Resultando que el investigador de Propiedades y Derechos del Estado en la provincia de Burgos denunció como pertenecientes á los propios de Revilla del Campo unas fincas afectas á censo enfiteutico, que estaban poseyendo Pedro Mansilla y otros vecinos de dicho lugar; y que seguido el expediente sin audiencia de éstos, fué aprobada la denuncia por la Junta superior de Ventas:

Resultando que sabedores de ello dichos interesados presentaron demanda en 20 de setiembre de 1859 ante el Juzgado de Hacienda de Burgos, con la solicitud de que se declarase nula aquella denuncia, y que los bienes objeto de la misma que constaban en el apeo que debía existir en poder del Conde de Berberana, y de parte de los cuales estaban ellos en posesion, eran de su exclusivo dominio, y no de los propios de Revilla del Campo, mandando en su consecuencia se les respetara en su posesion y propiedad, con imposicion de las costas á la Hacienda pública:

Resultando que por auto del 28 se negó el Juez á dar curso á la demanda por no acreditarse haber intentado previamente los interesados la via gubernativa, y que por este motivo y por el de no justificar se hubiese deducido dentro del término señalado por la Real orden de 10 de junio de 1856, declaró en auto de 3 de octubre siguiente no haber lugar á la reforma que Mansilla y consortes pidieron del anterior, acompañando el oficio que les habia pasado la Administracion participándoles no daba curso á la reclamacion que por su conducto dirigian al Director general de Propiedades y Derechos del Estado:

Resultando que pasados los autos á la Audiencia de Burgos por apelacion de los demandantes, presentaron una certificación del Secretario del Ayuntamiento de Revilla del Campo para acreditar que habian acudido dentro del término correspondiente á usar de su derecho, y que, seguida la instancia con audiencia del Fiscal de S. M., pronunció sentencia la Sala segunda en 25 de enero último confirmando el auto apelado:

Y resultando que interpuso el recurso de casacion por Mansilla y consortes, y no habiéndoles sido admitido, apelaron de esa negativa para ante este Tribunal Supremo:

Vistos, siendo Ponente el Ministro Don Pablo Jimenez de Palacio:

Considerando que la providencia dictada en estos autos por la Sala segunda de la Audiencia de Burgos, que dió motivo al recurso de casacion entablado por Pedro Mansilla y liti consortes, el cual no fué admitido por dicha Sala, dando

con ello lugar á la apelación que se ventila, no es de las designadas en los artículos 1.010 y 1.011 de la ley de Enjuiciamiento civil por haber recaído sobre un artículo de previo y especial pronunciamiento, que ni puede terminarse al juicio ni hace imposible su continuación; Fallamos que debemos confirmar y confirmamos con las costas la providencia apelada que dictó la Sala segunda de la Audiencia de Burgos en 13 de febrero último.

Y por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta dentro de los cinco días posteriores á su fecha, y se insertará en la Colección legislativa, á cuyo efecto se pasarán las copias correspondientes, así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Ramon Lopez Vazquez.—Sebastian Gonzalez Nandin.—Miguel Osca.—Joaquin de Palma y Vinuesa.—Pedro Gomez de Hermosa.—Pablo Jimenez de Palacio.—Laureano Rojo de Norzagaray.

Publicacion.—Leida y publicada fué la sentencia anterior por el Ilmo. Sr. Don Ramon Lopez Vazquez, Presidente de la Sala primera del Tribunal Supremo de Justicia, estándose celebrando audiencia pública en la misma, de que certificó como Secretario de S. M. y Escribano de Cámara de dicho Supremo Tribunal, Madrid, 18 de setiembre de 1860.—José Calatraveño.

En la villa y corte de Madrid, á 18 de setiembre de 1860, en los autos de competencia que ante Nos penden en el Juzgado de la Capitanía general de Aragón y el de primera instancia del distrito del Pilar de Zaragoza, sobre el conocimiento de la causa formada contra Esteban Arraiza y Jordan por tentativa de robo.

Resultando que el Arraiza, soldado desertor del regimiento de Zamora, fué preso por la Autoridad civil y procesado á consecuencia del robo y muerte de D. Carlos Alonso; que en aquella causa aparecieron indicaciones de que el mismo Arraiza y otro sugeto intentaron robar las casas de D. Francisco Casanova y D. Antonio Gascon; y para averiguar la existencia y autores de este delito se formó el presente proceso.

Resultando que el Juzgado de Guerra ha reclamado el conocimiento del mismo en cuanto á Arraiza, fundándose en que la Real orden de 8 de julio de 1852 derogó el decreto de las Cortes de 11 de setiembre de 1820, restablecido en 30 de agosto de 1836, y puso en observancia la ley 5.ª, tit. 9.º, libro 10 de la Novísima Recopilación, según la cual, siempre que un soldado desertor cometiese los delitos de robo, homicidio u otro en poblado ó despoblado, solo ó acompañado de otras personas en número menor del necesario para formar cuadrilla, debe la Justicia que lo aprehenda remitirlo á la Autoridad militar y ser juzgado por ésta; y en que Esteban Arraiza iba acompañado únicamente de otro sugeto cuando se intentó robar á D. Francisco Casanova y D. Antonio Gascon.

Resultando que el Juez de primera instancia del distrito del Pilar de Zaragoza sostiene su jurisdicción alegando que el decreto de las Cortes arriba citado está en vigor y observancia sin que haya podido ser derogado por una Real orden; y según el los desertores del ejército que cometieren el delito de robo, sin distinción de si fué ó no en cuadrilla, deben ser juzgados por las Justicias or-

dinarias cuando fueren aprehendidos por ellas.

Vistos, siendo Ponente el Ministro de este Supremo Tribunal D. Felipe de Urbina.

Considerando que por la Real orden de 8 de julio de 1852 no puede derogarse una verdadera ley, como lo es el decreto de las Cortes de 11 de setiembre de 1820, restablecido en 30 de agosto de 1836, que está vigente, y que en su art. 4.º se declara que todo desertor del ejército ó de la armada que, solo ó acompañado, cometa un delito por el cual sea aprehendido por la jurisdicción ordinaria, debe ser juzgado sobre él por la misma exclusivamente;

Y considerando que el soldado desertor Esteban Arraiza y Jordan fué aprehendido por la Autoridad civil y puesto á disposición del Juzgado de primera instancia del distrito del Pilar de Zaragoza;

Fallamos que debemos declarar y declaramos que el conocimiento de esta causa corresponde al expresado Juez de primera instancia, al que se remitan unas y otras actuaciones para lo que proceda con arreglo á derecho.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta del Gobierno é insertará en la Colección legislativa, para lo cual se pasen las oportunas copias certificadas, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Ramon Maria de Arriola.—Felix Herrera de la Riva.—Juan Maria Blec.—Felipe de Urbina.—Eduardo Elío.—Domingo Moreno.

Publicacion.—Leida y publicada fué la precedente sentencia por el Ilmo. Señor D. Felipe de Urbina, Ministro del Tribunal Supremo de Justicia, estándose celebrando audiencia pública en su Sala segunda hoy día de la fecha, de que certificó como Secretario de S. M. y Escribano de Cámara.

Madrid 18 de setiembre de 1860.—Dionisio Antonio de Puga.

En la Gaceta de Madrid número 266 del sábado 22 del actual se lee lo siguiente:

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.

En la villa y corte de Madrid, á 15 de setiembre de 1860, en los autos pendientes ante Nos por recurso de casacion seguidos en el Juzgado de primera instancia de Alicante y en la Sala tercera de la Real Audiencia de Valencia entre D. Celestino, D. Juan Pedro y Doña Carmen Lafont, representada ésta por su marido D. Francisco de Paula Redondo, y Don Tomas Toomy, sobre remocion de éste, como sospechoso, del cargo de curador ejemplar del demente D. Juan Roque Lafont.

Resultando que el Juez de primera instancia de Alicante, en 21 de marzo de 1852, nombró á D. Tomas Toomy, curador ejemplar del demente D. Juan Roque Lafont, á solicitud de su hermano D. José Lafont y Bardisé, á quien su avanzada edad y la grave enfermedad que padecía, le impedían continuar en la curatela de aquel.

Resultando que en el citado día otorgó su testamento D. José Lafont, en el cual nombró por albaceas á su mujer Doña Maria Antonia Savignone y á Don Tomas Toomy, y por heredero usufructuario á su hermano D. Juan Roque, pasando á su muerte la propiedad de la herencia á su esposa Doña Antonia Savignone.

Resultando que falleció bajo este testamento D. José Lafont, en 6 de abril siguiente, y aceptada su herencia á beneficio de inventario por la viuda y el curador del demente, fueron estos autorizados por

el Juez para proceder extrajudicialmente á la particion de los bienes, que se verificó por el contador nombrado de comun acuerdo por aquellos.

Resultando que en 2 de abril de 1857 D. Celestino, D. Juan Pedro y Doña Carmen Lafont, como primos carnales del demente, entablaron demanda para la remocion del curador nombrado al mismo, fundándola en que no era ciudadano español, ni persona de arraigo, habiéndose hecho su nombramiento en un día feriado, y por lo tanto inhábil; y en otras causas, todas las cuales fueron objeto de prueba testifical.

Resultando que D. Tomas Toomy impugnó la demanda porque, ademas de la inexactitud de los hechos expuestos en ella, no se alegaba causa alguna suficiente para su remocion.

Resultando que, practicada por las partes la indicada prueba testifical, el Juez, por sentencia de 23 de setiembre de 1857, absolvió á D. Tomas Toomy de la demanda propuesta contra él, declarando no haber lugar á removerle por sospechoso de la curatela ejemplar de Don Juan Roque Lafont.

Resultando que confirmada esta sentencia por la Sala tercera de la Real Audiencia de Valencia, interpusieron los demandantes el presente recurso de casacion, fundándole en que era contraria al espíritu de todas las leyes del tit. 18, Partida 6.ª, y también á la disposicion literal de la 1.ª y de la 3.ª, según las que debí ser removido el curador si no hiciere inventario de los bienes del huérfano, y aun de oficio y sin acusacion, si el Juez viere que hacia mal en la Hacienda de aquel.

Visto, siendo Ponente el Ministro Don Sebastian Gonzalez Nandin.

Considerando, que es inadmisible el primer motivo del recurso, que comprende como infringidas en su espíritu, todas las leyes del título 18, Partida 6.ª por no ser conforme esa manera vaga é indefinida de citar infracciones, á lo prescrito en el artículo 1.024 de la ley de Enjuiciamiento, el cual requiere la designacion precisa y determinada de las leyes ó doctrinas legales, que se consideren infringidas.

Considerando que, existiendo en autos el inventario de los bienes del demente, no se ha faltado á lo dispuesto en la ley 1.ª, título 18, Partida 6.ª, la cual por consiguiente no ha sido infringida.

Considerando que la conducta del demandado, en concepto de curador fué objeto de prueba testifical que apreció la Sala sentenciadora con arreglo á lo prevenido en el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento.

Considerando, por tanto, que tampoco ha sido infringida la ley 3.ª del indicado título y Partida, la cual con la anteriormente referida, han sido las únicas, concretas y determinadamente citadas en el presente recurso.

Fallamos, que debemos declarar y declaramos no haber lugar á él, y condenamos á los recurrentes D. Celestino Lafont y consortes en las costas y á la pérdida del depósito que se distribuirá con arreglo á la ley, devolviéndose los autos á la Real Audiencia de Valencia de donde proceden.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta é insertará en la Colección legislativa, pasándose al efecto las oportunas copias, lo pronunciamos mandamos y firmamos.—Ramon Lopez Vazquez.—Sebastian Gonzalez Nandin.—Miguel Osca.—Antero de Echarri.—Joaquin de Palma y Vinuesa.—Pedro Gomez de Hermosa.—Pablo Jimenez de Palacio.

Publicacion.—Leida y publicada fué la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Presidente de la Sala primera D. Ramon Lopez Vazquez, celebrando audiencia pública la misma Sala en el día de hoy, de que yo el Escribano de Cámara certifico.

Madrid 15 de setiembre de 1860.—Juan de Dios Rubio.

En la villa y corte de Madrid, á 18 de setiembre de 1860, en los autos seguidos por D. José Maria Ponce de Leon, vecino del partido de Jiquima, contra D. Oscar Berbarhe, Conde de Royal, que lo es de la ciudad de la Habana, sobre rescision del contrato de venta del ingenio *Industria*; autos pendientes ante Nos por haber sido admitido el recurso de casacion que interpuso dicho Conde contra la sentencia dictada por la Sala primera de la Audiencia de la expresada ciudad, compuesta de tres Magistrados, por la que se confirmaron con costas la sentencia definitiva y la providencia aclaratoria de ésta, pronunciadas por el Alcalde mayor quinto de la misma ciudad.

Resultando que en 13 de diciembre de 1852 firmaron un contrato privado Ponce de Leon y el Conde, por el que el primero vendió al segundo el referido ingenio *Industria*, juntamente con 42 negros de ambos sexos, y con los animales, trenes, máquina y demás efectos anejos á la finca; acordando los contrayentes varias cláusulas, y entre ellas las que siguen:

1.ª Que el Conde daba por el ingenio 118,150 pesos en esta forma: 18,150 que reconocia la finca del censo al 5 por 100 anual á favor del Marqués de la Real Proclamacion; 10,000 de presente, de los que se dió el vendedor por entregado; 6,000 que satisfaría el comprador en 15 de marzo, y otros 6,000 en igual día de mayo de 1853; y los 78,000 restantes pagaderos en los cinco años próximos siguientes á éste, á razon de 15,300 en cada uno.

2.ª Que el comprador se daba por entregado del ingenio, habiéndole visto y examinado á su satisfaccion, y habiéndosele hecho tradicion y cuasi tradicion de lo que se le vendia, y que Ponce de Leon garantizaba que dicha finca tenia á la sazón 16 caballerías sembradas de caña.

3.ª Que si el comprador faltase al pago de los plazos estipulados, Ponce de Leon podria rescindir la venta ó ejecutarle por lo que éste le adeudara; y si el vendedor en virtud de ello reasumiese la finca, los desembolsos que hubiera hecho el comprador le serian devueltos en doble número de años, recibiendo bajo tal concepto al restituir la finca la mitad del contado que habia exhibido, y la otra mitad despues que se pagase en la misma forma lo que hubiese satisfecho de plazos, los que tambien se reintegrarian por mitad cada año.

6.ª Que si al tomar Ponce de Leon el ingenio hubiese mejoras de importancia y provenientes de la industria empleada por el Conde, se tasarían pericialmente del modo que se expresó que estas mejoras se abonarian en el término de un año, principiado á contar desde la última entrega que hiciere el vendedor por cuenta del precio, y que las mejoras que (aquí parece faltar la palabra *no*) fuesen de necesidad indispensable para la finca, podria llevarse las el Conde si á Ponce de Leon no le conviniese pagar nada por su avalúo.

10.ª Que el vendedor garantizaba al comprador que la máquina de vapor existente en el ingenio se hallaba en estado de moler y de empezar á hacer la zafra en 15 de aquel mes de diciembre, por tener todas las partes que al efecto necesitaba, sin responder el vendedor de ninguna averia que sobreviniese por cualquier accidente.

11.ª Que se obligaba Ponce de Leon á concluir la casa de vivienda que se estaba construyendo en la finca hasta que fuese habitable, y que la obra se terminaria en aquel mismo mes.

12.ª Que no se reducía el contrato á escritura pública en aquel día por existir dos entredichos discernidos por el Tribunal de Guerra á los bienes de D. Manuel Espinosa Romero, de quien habia heredado el ingenio la persona que se le habia transmitido á Ponce de Leon, y otros á los de aquella misma persona; pero que considerando los contrayentes, por lo que indicaron, que desde el entonces proximo mes de mayo estaria removido tal óbáculo, estipulaban que antes del día 15 del

indicado, mayo, se formaría la enunciativa...
Y 13. Expresiva, entre otras cosas, de que si por defecto de la máquina, ó de los trenes del ingenio no pudiera empezarse a moer en el día fiado 15 de aquel mes de diciembre, tendría el Conde el derecho de hacer reconocer aquella por peritos, á su equidad y á su costo, en todo el propio mes, para que conociese si por defecto en ella no había comenzado la molida en la fecha convenida.
Resultando que, promovidos autos por Ponca de Leon, en los que entabló ejecución contra el Conde en abril de 1853 por la cantidad de 6,000 pesos, importe del plazo vencido en 15 de marzo, se declaró aquella sin lugar, y se mandó devolverle los autos para que entablase su acción en la vía correspondiente, decidieron que fue convalidada en vista y revista en setiembre de aquel mismo año, y que instaurada otra demanda por el mismo Ponca también contra el Conde reclamándole los 6,000 pesos, los jornales de los negros que tenía á quitados y la formación de la escritura de compra-venta del ingenio de que se trata, y sustentada hasta recibirse á prueba, cuyo término se interrumpió por haber solicitado Ponca que se dictara por fuerza aquella demanda, para entablar otra sobre rescisión, se le tuvo al fin por separado á su perjuicio, según auto de 20 de abril de 1854.
Resultando que en 23 de marzo del propio año de 1854 propuso Ponca de Leon la demanda del pleito actual, exponiendo en ella que mediante no haberle satisfecho el comprador los plazos vencidos en mayo del año próximo anterior, y en 15 de aquel mismo marzo, debía restituirle la finca vendida, y pidiendo que se declarase rescindida la venta del ingenio y se mandase al Conde que se lo devolviese.
Resultando que al contestar expresó el demandado que mediante la elección que Ponca de Leon había hecho de la vía judicial, no podía ya separarse de ella y acudir á la rescisión, sino seguir aquella, la cual, si antes había sido desestimada por intempestiva, actualmente podía continuarse, puesto que se hallaban removidos los obstáculos que impedían la formación de la escritura, y que el mismo tiempo que él había satisfecho al vendedor 16,000 pesos, éste había fallado á su estipulado, porque no había concluido á su debido tiempo la casa de vivienda, ni era cierto que existiesen, según aseguró, las 16 caballerías sembradas de caña, faltando además objetos de consideración en el pago, y no teniendo éste ni la extensión ni el valor que se le habían supuesto; por lo cual, y sosteniendo que había sufrido lesión grave y que ascendía á más de 40,000 pesos los daños y perjuicios que se le habían irrogado, terminó con la pretensión de que se le absolviese, y de que se mandase que rechazándose del precio comprando las faltas y perjuicios que reclamaba, se procediese al otorgamiento de la escritura.
Resultando que, seguido el juicio y recibida la prueba, se practicaron varias pericias, habiendo expuesto el demandado en el curso del escrito en que propuso la suya que, como reconocía la demanda recordada al juzgado que había protestado los daños y perjuicios terminando el otro con la solicitud de que se tuviese por hecha esta manifestación, que se reservaba entablar, si le pareció de lo que resultase en definitiva en el pleito actual.
Resultando que en el alegato de Leon probado del Conde se dijo que se aceptaba la rescisión con lo que se le abonasen al punto lo que por contrato y plazos había satisfecho, los jornales que tenía la finca

y las costas, daños y perjuicios gravísimos que el vendedor le había irrogado; habiendo sido o preterido en este escrito que se declarase sin lugar la rescisión, y solo reservado su derecho para reclamar de dicho vendedor las cantidades que le adeudaba por los gastos que eran de cargo de aquel, y los daños y perjuicios que le había ocasionado, así como también para que se rebajase del precio las cantidades que expusiera de su legítimo valor.
Resultando en 28 de marzo de 1855 pronunció el Alcalde mayor la sentencia indicada al principio, por la que se declaró rescindido el contrato litigioso, y que en su virtud el demandado debía entregar el ingenio al demandante, y este al demandado en una partida el importe del precio que había el mismo demandado exhibido, y de las impensas útiles y necesarias que hubiese hecho en la finca, á cuyo efecto se lesarían previamente por peritos, pues que la entrega del ingenio é importe del precio é impensas debía ser simultánea, sin que ninguna de las partes pudiera pretender que precediese la una ni la otra.
Resultando que pedida aclaración de la precedente sentencia por Ponca de Leon, se dictó providencia en el mismo día, por la que se declaró que la tasación de los peritos debía extenderse á las faltas y desmejoras, y deducirse su importe de las mejoras é impensas útiles y necesarias, ó abonarse por el comprador si no las hubiese, á cuyo fin se tendría presente el inventario por el que había sido entregada la finca.
Resultando que admitida la apelación interpuesta por el demandado, así de la sentencia como de la providencia aclaratoria, pretendió en la segunda instancia la revocación de aquellas y absolución de la demanda, y que cuando á ella no hubiese lugar, se declarase que además de las impensas útiles y necesarias se le debían abonar antes de la entrega del ingenio todos los perjuicios que se le habían seguido por las injurídicas demandas de Ponca de Leon, embargos inoportunos y demás obstáculos que le habían precisado á presentarse en concurso de acreedores.
Resultando que sustentada la apelación, recayó en 27 de setiembre del mismo año de 1856 la sentencia de la Audiencia, también indicada antes, por la que se confirmaron con costas la definitiva del Juzgado inferior y su aclaratoria.
Resultando que el Conde, alegando que nada se había provisto en la sentencia acerca de una de las excepciones propuestas, cual era la del rescarcimiento de daños y perjuicios, y que por ello procedía que se le admitiese, según la regla tercera del título (debía decir artículo) 59 de la Real cédula de 30 de enero de 1855, la suplica, interpuso ésta y le fue denegada por la Audiencia de la Habana.
Resultando que después propuso contra la misma sentencia recurso de casación, alegando que por ella se habían infringido la ley 1.ª, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación; la 32, tit. 28, Partida 3.ª, y la 38, tit. 5.º, Partida 5.ª; y que también había sido violada la regla tercera del art. 59 de la expresada Real cédula de 1855.
Vistos en esta Sala de Indias:
Considerando, en cuanto al motivo de casación relativo á la forma alegado por el Conde de Royal, que por las sentencias de primera y segunda instancia dictadas en este pleito se fallaron todos los puntos comprendidos en la demanda del autor, y se resolvió asimismo sobre todas y cada una de las excepciones propuestas por el demandado; que por tanto era improcedente la admisión de la suplica que el Conde interpuso, y que denegándola no se falló á lo que previene la regla tercera del artículo 59 de la Real cédula de 30 de enero de 1855;
Considerando, en cuanto al recurso de casación en el fondo que la ley 1.ª, título 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación, prescindiendo de formulas y solemnidades

externas, y atendiendo solo á la intención y voluntad de los que pactan ó contraen, sanciona el principio general de que de cualquier manera que aparezca que no quiso obligarse quede obligado; que la sentencia contra la cual se interpuso el recurso no contraria este principio, porque no establece que deban dejar de cumplirse las obligaciones contraídas, sino que apreciando por el contenido del documento privado que hicieron Ponca de Leon y Barbeche, y por el resultado de las pruebas, cuales son las que contrarían uno y otro, les condena á ambos á su cumplimiento, y por tanto no aparece infringida la citada ley.
Considerando que la 39, título 28 de la partida 3.ª determina de quien debe ser el señorio de los frutos de la heredad ajena cuando es vendido en juicio el tenedor de ella; y que no habiéndose tratado en este pleito de la restitución de frutos percibidos, ni es aplicable ni pudo haberse infringido por el fallo la expresada ley.
Considerando, por último, que al pactarse en la cláusula 5.ª del contrato de venta hecha por D. José María Ponca de Leon á D. Oscar Barbeche que al éste faltaba el pago de los plazos estipulados podría aquel ejecutarlo por lo que debiese á pedir la rescisión de la venta, se dio al Don José este derecho alternativo ó de elección en todas y cada una de las épocas en que se faltara al cumplimiento de uno de los plazos; que la ley 38, tit. 5.º, Partida 5.ª trata señaladamente del caso en que una sola vez tenga el vendedor el derecho de pedir á su elección el cumplimiento del contrato ó su rescisión, prescribiendo para entonces que elegido uno de los medios no pueda después acudir al otro; y que son por lo mismo diversos el caso actual y el de la ley citada, la que por tanto no ha podido ser infringida.
Fallamos que debemos declarar y decretar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por D. Oscar Barbeche, Conde de Royal, á quien en su consecuencia condenamos en las costas y á la pérdida de la cantidad de que se obliga á responder para el recurso, cantidad que en caso de hacerse efectiva si llegare el obligado á mejor fortuna, se distribuirá con arreglo al artículo 218 de la citada Real cédula de 1855.
Así por la presente sentencia, que se publicará en la Gaceta del Gobierno, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.— José Gamarra y Cambionero.— Manuel García de la Cotera.— Miguel de Najera Méndez.— Vicente Valor.— José Portilla.— Gabriel Cernelo de Velasco.— Joaquín Bechón y Pinazo.
Publicación.— Leída y publicada fue la anterior sentencia por el ilmo. Sr. Don José Gamarra y Cambionero, Ministro del Supremo Tribunal de Justicia y Presidente de su Sala de Indias, de que yo el Secretario de S. M. y Escribano de Cámara certifico.
Madrid 18 de setiembre de 1860.— Pedro Sánchez de Ocaña.

CUARTA SECCION
INSTITUTO DE 2.ª ENSEÑANZA DE ORENSE.
Por tercera y última vez se invita á los dueños y conductores del terreno necesario para la construcción de un nuevo Instituto en que han de reunirse los demás establecimientos provinciales de enseñanza, á que presenten sus proposiciones ó su proposición colectiva con arreglo al lo prevenido en los Boleines de 3 de abril, 1.º de mayo y siguientes del corriente año, acompañando el plano de dicho terreno, todo en el plazo improrrogable de quince días contados desde la fecha; pues concluido este preteritorio término no se admitirá proposición alguna.

Orense 1.º de octubre de 1860.—El Director, Leoncio Percejon.—El Secretario, Joaquín Gual.
Juzgado de 1.ª instancia de Orense.
Don Bernardo María Hervás, juez de primera instancia de Orense y su partido.
Por el presente se cita, llama y emplaza por el término de nueve días á Don Manuel de Novas, de Palines, para que concurre á este juzgado á fin de practicarle diligencia de citación y emplazamiento para ante S. E. los Sres. del superior Tribunal, en causa criminal formada contra Juan Roba por hurto de efectos, aprehendiéndole que de no realizarlo en el plazo marcado, tendrá efecto aquella autuación en los estrados, y le causará estado civil si se le practicara en persona. Dado en Orense á 25 de setiembre de 1860.—Bernardo María Hervás.
Por mandado de S. S. Santos de la Torre.
Don Manuel Vazquez, Alcaide del Juzgado de primera instancia de Orense.
Por el presente, y en virtud de sentencia dictada por el Sr. Juez de primera instancia del partido, se saca á pública subasta por término de veinte días, para hacer pago de 2,000 rs. que Francisco Requejo, vecino de Soutillo, adeuda á D. Manuel Fernandez Abad de Villarino, un molino harinero, sito en el regato llamado de Sequeros, confluente á naciente, y sur con camino de carro que de Coles baja á Sequeros, norte y poniente con el citado arroyo, el cual fue tasado en la cantidad de 5,120 rs. Las personas que quieran interesarse en su adquisición concurrán ante mí y el infrascrito Escribano á la casa de Ayuntamiento de Coles, señalándose para el remate el día 15 de octubre próximo, de diez á once de la mañana.
Dado en Coles á 21 de setiembre de 1860.—Manuel Vazquez.—Por su mandado, Manuel María Vazquez.
Juzgado de paz de Ganzo de Limia.
Don Alejandro Alvarez, secretario del juzgado de paz del distrito de Ganzo de Limia.—Certifico que en el juicio verbal celebrado en este juzgado entre Gaspar Romero, de esta villa, y en rebeldía de Francisco Conde, de Paredes, recayó la siguiente sentencia: Dado en Ganzo de Limia á 27 de agosto de 1859.
El Lic. D. Gerardo Morenza, primer suplente del juzgado de paz de la misma.
Habiendo visto el acta de juicio verbal celebrado en este día entre D. Gaspar Romero, del Comercio de esta villa, y en rebeldía de Francisco Conde, vecino de Paredes, por ante mí secretario dijo:
Resultando que D. Gaspar Romero reclamó á Francisco Conde por la cantidad de 200 rs. que le adeuda, procedidos de géneros y otros artículos que lo vendió al fiado; acordando que se le pague al fiado; acordando que el demandado, sin embargo de haber sido citado en forma no compareció al juicio.
Considerando que el demandante ha probado la certeza de su crédito, y que también se demuestra por la falta de comparecencia del demandado.
Ballo que debe condenar y condena á Francisco Conde, á que pague con las costas al D. Gaspar Romero los 200 rs. por que le demandó, y por esta su sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncia, manda y firma de que certifico.—Gerardo Morenza.—Alejandro Alvarez.
Así resulta de dicho juicio á que me refiero, y á fin de que se inserte en el Boletín oficial de esta provincia, conforme á lo prescrito en la ley de Encjuiciamiento civil, expido el presente, por duplicado, en Ganzo á 23 de setiembre de 1860.—Alejandro Alvarez.
IMPRESA DE D. CESAREO PAZ Y H.